

Evaluación anual del 2009:

Mirada de comunidades y organizaciones civiles en medioambiente

El equipo del programa Pulso Ambiental, reunió diversas opiniones de comunidades afectadas por proyectos industriales para evaluar el 2009. La idea era hacer esta evaluación desde la tierra, del agua y desde las comunidades que han optado por la vida cuidando su territorio, movilizadas y organizadas luchando por tener un medio ambiente limpio, sano y sin amenazas de contaminación.

Vale decir que, en la mayoría de los casos, estar por un ambiente limpio y sano, ha significado estar en contra de proyectos de inversión industriales que amenazan los bienes comunes. Asimismo, se han opuesto a políticas del gobierno o de reparticiones públicas que van en contra de los intereses de las comunidades y a favor de empresas nacionales y multinacionales y sus proyectos de inversión.

También es importante recordar que estamos a meses de que concluya la administración de la Presidenta Michelle Bachelet quien al asumir su Mandato se comprometió a avanzar en diversos temas ambientales. Sin embargo, de esos compromisos muchos salieron de la agenda derechamente. Otros quedaron trancos, como la creación de una nueva institucionalidad ambiental para el país y que fue uno de los hechos más cuestionados durante el 2009 por el mundo social y ecologista.

Esto porque ante las más de mil sugerencias que los parlamentarios le realizaron al proyecto de Ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, de la noche a la mañana surgió un acuerdo entre el gobierno y la derecha para aprobar el proyecto. Avanzaron en tiempo récord, sin información pública, ni menos participación ciudadana. El Senador Longeira y la ministra de Medioambiente Ana Lya Uriarte fueron los artífices de dicha ley.

Como se ha mencionado en diversas oportunidades, esa es otra ley de amarre del gobierno y la derecha política y empresarial, que deja la administración de Bachelet.

Resistencia comunitaria en diversos territorios

Desde los últimos años, y particularmente durante el 2009, se ha logrado visibilizar a nivel de todo el país una respuesta social y ciudadana importante a los efectos de la expansión del modelo económico que está centrado en la explotación de los recursos naturales. Es justamente allí, donde tenemos la mayor cantidad de cosas positivas este año, al margen de algunas menciones que se pueden hacer respecto a los avances institucionales, normativos o de algunas políticas en que parcialmente se han obtenido algunos avances.

Sin duda, lo más gravitante es rescatar el rol de la ciudadanía, de las comunidades y de las organizaciones locales. Es allí donde podemos rescatar casos donde ha habido triunfos y avances concretos que están construyendo esta nueva situación ambiental en Chile, que es a partir del ejercicio directo de los derechos ambientales de las comunidades y que van también marcando la pauta en temas nacionales.

Por ejemplo, en las últimas elecciones Presidenciales que ha enfrentado el país se han incluido temas como el agua, la nacionalización o recuperación de los minerales,

la modificación de la Constitución Política del Estado considerando la soberanía de los recursos naturales. Todos esos son temas que se vienen colocando o que pasan al debate público a partir de los conflictos ambientales locales.

Sin embargo, la autoridad intenta instalar en la imagen pública que la movilización o la presión social no es el camino. Pero cuando se revisan los avances que se tienen, como en la defensa de los derechos y la creación de la conciencia, sin duda el camino es el debate público, la fiscalización y la movilización de la comunidad. Esa es la manera en que se van haciendo respetar los derechos y se van construyendo estos nuevos derechos colectivos como son los derechos ambientales.

Lo que ha sucedido con Pascua Lama es un paradigma de cómo la resistencia comunitaria ha logrado retrasar 8 ó 9 años el inicio de la construcción de este megaproyecto de extracción de minerales en la cordillera de los andes, el primer proyecto binacional, en beneficio de multinacionales.

Lo mismo ha sucedido en Mehuín, donde el Comité de Defensa del Mar lleva casi 12 años defendiendo y protegiendo el mar de esa zona de la comuna de San José de la Mariquina frente a la Celulosa Arauco. Solo la resistencia comunitaria de los pescadores artesanales y comunidades indígenas ha dejado sin efecto las pretensiones de Celco.

Algo similar sucedió con la Termoeléctrica Campiche donde las comunidades organizadas lograron cambiar decisiones que ya habían tomado las autoridades. También las comunidades aymaras en el norte han tenido triunfos importantes en la defensa y recuperación del agua, solo por mencionar algunos ejemplos.

Del Sur del mundo

Desde Temuco, en la región de la Araucanía, Angélica Hernández, integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales de la Araucanía (RADA), manifiesta tajantemente que para el gobierno el tema ambiental no es prioridad, y ejemplifica manifestando con que la gente sigue comiendo alimentos con plaguicidas, las temporeras se siguen intoxicando y se han propuesto leyes nefastas como la Ley de Obtentores Vegetales que intenta privatizar las semillas.

De hecho, la dirigente dice que “es un hecho que lo ambiental no es prioridad para las políticas públicas en nuestro país. La prioridad claramente está establecida en el mercado, en todas las acciones que aumentan la macroeconomía del país, las exportaciones y las arcas internas macroeconómicas. Se ve una absoluta impunidad a las empresas que contaminan y transgreden los derechos sociales y humanos”.

Hernández da como ejemplo de la poca importancia que le da el gobierno al tema ambiental lo que ha sucedido con Celco Mariquina en el caso de Mehuín, con Pascua Lama, y la explotación geotérmica en los Géysers del Tatio, y advierte que “hay muchos ejemplos más”.

Desde Mehuín, donde los pescadores resisten para evitar que CELCO instale un ducto al mar, las comunidades evalúan este año como nefasto y terriblemente violatorio de los derechos humanos.

Eliab Viguera, dirigente del Comité de Defensa del Mar, explica que, para intentar terminar con la resistencia de la zona, han habido acuerdos entre CELCO y algunos pescadores, amedrentamiento de parte de la Armada de Chile, y también se han ido destapando vínculos de los funcionarios públicos con la empresa.

El defensor del mar manifiesta que “este año fue nefasto, terriblemente violatorio de los derechos de las personas, y eso habla mal de un gobierno concertacionista que hace mucha propaganda a su democracia, mucha propaganda de estar respetando los derechos de las personas, esencialmente en los que habrían confiado en ellos, puesto que no hay que olvidar que ellos rescataron al país de la dictadura, pero lamentablemente abusaron”.

Pese a lo anterior, el optimismo de la resistencia en las costas de Mehuín sigue en pie ya que consideran que el triunfo más importante ha sido que la gente ha ido tomando conciencia de que el mar no es un basurero, sino que es vida y hay que defenderlo.

Salmonicultura

Más al sur, en la Región de Los Lagos, Aysén existe una crisis sanitaria y social que se vive como consecuencia de las malas prácticas salmoneras y que ha dejado sobre 20 mil trabajadores cesantes, han cerrado centros de cultivos, y ha significado un fuerte impacto en el patrimonio sanitario y ambiental de Chiloé y Aysén fundamentalmente.

A lo anterior, le agregamos la operación de salvataje gubernamental para las grandes compañías salmoneras donde se les entregó durante este año de forma directa un crédito de 450 millones de dólares vía bancos a un pequeño grupo de empresas con el aval en un 60% del dinero de los contribuyentes nacionales.

Sin duda, lo más nefasto en esta materia ha sido el proyecto de reforma de Ley General de Pesca y Acuicultura, y que lo describe Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos quien evalúa este proyecto como “escandaloso ya que pretende entregar concesiones de acuicultura por 25 años renovable sucesivamente por similares períodos, lo que constituiría una entrega solapada del litoral nacional a las grandes compañías salmoneras transnacionales, es decir una privatización del litoral”. Además, este proyecto permitiría la hipoteca de bienes nacionales de uso público como son las concesiones salmoneras.

Sin embargo, el director del Centro Ecocéanos ve de forma positiva la creciente resistencia de ciudadanos, de pescadores artesanales, comunidades costeras y empresarios regionales que se han sumado a la campaña “No a la privatización del mar”. Esta campaña ha tenido el apoyo de más de 40 mil pescadores artesanales y más de 20 mil ciudadanos que firmaron por esta campaña logrando detener por un año este proyecto de ley. Así, Cárdenas expresa que “esto es solo la expresión más concreta de que se avanza en una mayor coordinación de los distintos sectores y que se pueden lograr detener estos abusivos intentos de privatización de los recursos naturales”.

Zona norte, fértil resistencia

Las comunidades del Valle del Choapa en la región de Coquimbo se han enfrentado a un nuevo proyecto minero industrial en la zona que se llama Tres Valles, y que se suma al ya conocido proyecto Los Pelambres.

Frente a este nuevo emprendimiento que operaría en la comuna de Salamanca, la comunidad presentó sus reparos y logró cambiar condiciones técnicas fundamentales, que pese a la aprobación ambiental del proyecto en Conama, estarían dando un poco más de garantías a la población.

Lo que sin duda es positivo para las comunidades de la región de Coquimbo es la creación de dos comités de seguimientos comunitarios que se crearon para fiscalizar los proyectos mineros de la zona, específicamente el proyecto Los Pelambres. Cuando se vieron afectados por los derrames de esta minera este año, se movilizaron y cortaron la ruta por siete días, poniendo en riesgo la producción de la empresa obligando a los ejecutivos a negociar con la comunidad nuevas condiciones para garantizar un ambiente sano y limpio.

Inaldi Cofré, dirigente de la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS), asegura que incluso los ejecutivos de la minera se han dado cuenta de que tienen que cambiar el *switch* porque se sienten vulnerables, “y todo el mundo se dio cuenta de que son vulnerables al accionar ciudadano, porque siete días sin acceso a sus faenas les significó algunos cientos de millones de dólares que dejaron de recibir, y por eso creemos que si seguimos en este trabajo de lucha constante, sería y responsable vamos a hacer que la vulneración de derechos no sea tan grande como la que ocurre hoy”.

Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) expresa que en el tema de minería, sin duda Pascua Lama y la comunidad del Valle del Huasco, ha puesto sobre la mesa el debate de que Chile debe discutir una nueva política minera. Si bien en las últimas elecciones ha estado en el debate la recuperación de la minería como un recurso estratégico para el país, porque hoy día se entrega más del 70% de la producción minera a las empresas transnacionales. “Esto es un tema que tiene que cambiar”.

Zona centro y Cambio Climático

En Maipú, una de las comunas más contaminadas de Santiago, se trabaja para crear un Ecobarrio que permita vivir en una comunidad más sustentable y solidaria y, a la vez, combatir los efectos de la contaminación capitalina.

El Centro Social, Cultural y del Medioambiente, Ceibo, evalúa el año como de consolidación, donde se han incorporado más personas a la organización y, paralelamente se han estrechado lazos con instituciones internacionales de Noruega, lo que ha reforzado la idea de que el proyecto de Ecobarrio es posible en la ciudad.

Sin embargo, su mirada es bastante crítica frente a lo sucedido en la ONU con el Cambio Climático. El dirigente de Ceibo, Luis Márquez, expresa que “este año ha sido uno bien provechoso, salimos de lo que se conoce como crisis de crecimiento que pasa cuando más gente se incorpora al grupo y existe la diversidad tan grande que tenemos,

pero queda la sensación amarga de que esto cuesta que prenda en otras zonas de la ciudad, y lo que pasó en Copenhague que para nosotros es un retroceso, porque vemos que las autoridades mundiales no se están poniendo los pantalones y vemos con preocupación lo que está pasando con el calentamiento global y el cambio climático”.

En ese mismo sentido, Eduardo Giesen, de la Red Internacional de Amigos de la Tierra y miembro de Codeff en Chile, y quien además estuvo en la última reunión sobre Cambio Climático que se realizó en Dinamarca, considera que en el 2009 este tema traspasó la agenda de las organizaciones ambientalistas y se incluyó en la opinión pública cotidiana.

Pese al fracaso en los acuerdos entre los países, Giesen es optimista y espera que el próximo año en la próxima reunión para enfrentar el cambio climático, los países latinoamericanos se presenten en bloque como acreedores de este problema.

El ecologista explica que “los latinoamericanos vamos a jugar de locales, y si bien sabemos que va a ser difícil y que va a ser un año muy complejo, el camino a esa reunión deberíamos tomarlo mucho más en nuestras manos”. Giesen explica que lo que pase en esa reunión va a depender mucho del camino que se haya recorrido, es decir “cuál sea la capacidad que tengamos las organizaciones y los movimientos de influir en las políticas y en las decisiones que vayan tomando nuestros gobiernos”.

La voz de la Iglesia

Una voz de esperanza y optimismo es la religiosa Cristina Höar, una de las primeras voces que alertaron de las amenazas que se ciernen con el proyecto Pascua Lama, y que hoy integra el Departamento de Justicia y Paz de la Creación de la Confederación de Religiosos y Religiosas de Chile (Conferre). Ella apuesta por la conciencia de la gente como motor de lucha por un ambiente limpio, y asegura que hoy “hay un poquito de conciencia sobre el tema (ambiental), por lo tanto uno puede decir que ha sido un avance de crear más y más conciencia sensibilizando a la gente y los grupos humanos sobre el tema del cuidado del medioambiente, y que se podría conversar de una Ética del cuidado, que no solamente es medioambiente, sino todo el hábitat donde vivimos”.

Desafíos para el año del Bicentenario nacional

Para este año del bicentenario, hay que comenzar a hablar de renacionalización de la minería, incorporándole la limitación territorial a la expansión minera en zonas que son vitales para la vida como las zonas altas de la Cordillera de los Andes, la zona de glaciares, el nacimiento de los ríos y la cabecera de las cuencas.

Lo mismo sucede en el tema de acuicultura y pesca. Se ha limitado la expansión de la industria salmonera en Magallanes impulsado por las organizaciones sociales, los pescadores artesanales y los empresarios. Ellos lograron el 2009 obtener una moratoria a la expansión que han logrado mantener en pie a pesar de todas las presiones gubernamentales durante el año y que implica las solicitud de más de 1.600 concesiones nuevas en la región de Magallanes.

Pero sin duda, el desafío más importante para el año 2010, es fortalecer y apoyar la movilización social y las comunidades locales para lograr que los bienes comunes y el patrimonio natural vuelvan al Estado. Debe ser una lucha por recuperar el uso del agua, renacionalizar el cobre, y evitar la privatización de nuestro mar. Todo esto debe comenzar con la desprivatización de los bienes comunes, y luego ver cómo se nacionalizan.

Todo esto claramente apuntando a la creación de una Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución elaborada desde las comunidades, las organizaciones sociales y las personas.

**Equipo Pulso Ambiental
Diciembre 2009**